

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 30° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-7383-2020  
CARATULADO : MUÑOZ/FISCO DE CHILE - CONSEJO DE  
DEFENSA DEL ESTADO

**Santiago, tres de Marzo de dos mil veintitrés**

**VISTOS:**

Con fecha 12 de mayo de 2020, comparece don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en Pasaje Doctor Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en representación de doña **Isabel Lorena Palleras Norambuena**, profesora y de don **Luciano Muñoz Palleras**, traductor de lenguaje de señas, ambos domiciliados en Pasaje Cuatro Remos Nro. 421, Cerro Florida, Valparaíso, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado -en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado- por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en Santiago, Agustinas 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, comuna de Santiago.

Sostiene que doña Isabel Lorena Palleras Norambuena, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 2 N° 6.450, nacida con fecha 19 de abril de 1962, a la fecha de ocurrencia de los hechos tenía 21 años de edad, siendo estudiante de Pedagogía en Educación General Básica en la Universidad de Playa Ancha, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y se encontraba embarazada, cursando su cuarto mes de embarazo.

Señala que fue detenida, junto a otros compañeros de la Universidad de Playa Ancha, militantes del Partido Comunista, por civiles, a su ingreso a la Universidad, el día 15 de Junio de 1983. El día de su detención se cursaba el tercer día de manifestaciones en la universidad, manifestaciones que decían relación con la exigencia del respeto a los Derechos Humanos y exigir el retorno a la democracia. Todos los detenidos, incluida su mandante, fueron subidos a un vehículo civil, desorientados y trasladados a un lugar desconocido (sin ventanas, con amplios murallones y muy alto). En dicho lugar, comienzan a interrogar a los



detenidos uno a uno. En el caso de doña Isabel, la obligan a desnudarse, le ponen sacos mojados en el cuerpo y comienzan a golpearla salvajemente, en varias partes de su cuerpo, pero fundamentalmente en la zona de su vientre, golpes que se prolongan por, a lo menos, 30 minutos. Se le pregunta acerca de la militancia de los compañeros con los cuales se encontraba detenida y acerca de sus actividades políticas. Mientras tanto, seguía siendo golpeada, entre una pregunta y otra. Sus interrogadores estaban vestidos de negro, con lentes oscuros y le mostraban fotos donde aparecía doña Isabel y sus compañeros en marchas, barricadas y actos públicos. La instan a dar información, manifestándole que sus compañeros “ya habían hablado” . Se le imputan cargos de daños a la propiedad privada y pública, asociación ilícita y tenencia de armas. Además, durante el interrogatorio al que fue sometida sus captores la identificaron como hermana de don Adolfo Mario Palleras Norambuena, ejecutado político, asesinado por la Caravana de la Muerte, por lo que los golpes fueron especialmente duros, siendo tratada doña Isabel con extrema violencia.

Agrega que con posterioridad a estos interrogatorios, su representada fue sacada del lugar, subida a un vehículo policial y trasladada a la comisaría de La Matriz. Al día siguiente, fue llevada al Séptimo Juzgado del Crimen de Valparaíso, donde se le abrió la causa rol N° 59 del año 1983 y, luego, trasladada a la Cárcel El Buen Pastor. La estadía en la Cárcel por parte de su representada fue muy angustiante, puesto que ya había sido asesinado su hermano por la Caravana de la Muerte, de modo que doña Isabel pensaba que sería asesinada por sus captores. Además, la experiencia en la cárcel fue traumática, siendo maltratada por presas comunes en varias ocasiones. Queda en libertad a los 20 días de su detención, por falta de méritos, el día 5 de Julio de 1983.

Refiere que una vez que queda en libertad, doña Isabel vuelve a la universidad donde es informada de su expulsión de la misma, perdiendo tres años de educación superior, además de que estudiaba la carrera de pedagogía en educación general básica por una genuina vocación. Recién pudo retomar su carrera el año 1990, debiendo partir de cero.

Indica que, producto de las torturas sufridas, persecución política e injusta privación de libertad, su representada padece de trastorno de estrés post traumático y depresión. Además, producto de la persecución política vio disgregada a su familia de origen, quienes sufrieron amedrentamiento, persecución y reclusiones, por



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB

lo que se vieron obligados a trasladarse a distintas regiones del país. En muchas ocasiones su representada se despierta durante las noches angustiada, con pesadillas, lo que le impide dormir normalmente. Nunca ha tenido contención psicológica o psiquiátrica y sólo su resiliencia le ha permitido salir adelante.

Asimismo, producto de las torturas sufridas, el hijo que esperaba al momento de su detención desarrolló a los cuatro meses de nacido una sordera bilateral profunda que le ha impedido tener las mismas oportunidades de vida que las personas sin esta condición, impedido para trabajar, por lo que se encuentra actualmente cesante, viviendo en su casa con sus dos hijas, ambas oyentes, y pareja, también no oyente, de modo que, en los hechos, es doña Isabel quien se hace cargo tanto de su hijo, como de su nuera y nietas.

A su turno, con respecto a don Luciano Muñoz Palleras, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 2 N° 5.818, nacido con fecha 5 de Noviembre de 1983, sostiene que a la fecha de ocurrencia de los hechos se encontraba en gestación en el vientre de su madre, Isabel Palleras Norambuena, quien cursaba su cuarto mes de embarazo.

Denota que producto de las torturas y golpes sufridos por su madre durante su detención y la angustia sufrida por ésta, quien pensaba que sería asesinada por la dictadura, tal como le había ocurrido a su hermano, su representado a los cuatro meses de nacido desarrolló una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y, según certificado emitido por los doctores don Mario Rodríguez Pizarro y doña Margarita Estefan Sagua, de fecha 14 de Abril de 2004, don Luciano se encuentra absolutamente incapacitado para ganarse el sustento, de modo que, por su condición de persona no oyente, le ha sido a su representado muy difícil insertarse en la vida laboral, puesto que no se dan las condiciones para ello, teniendo mucha inestabilidad laboral y sufriendo, por otro lado, discriminación debido a su condición.

Aunque desde pequeño su madre le educó en escuelas especiales públicas y don Luciano logró terminar una carrera experimental en la Universidad de Valparaíso que duró 4 semestres, sólo el apoyo de su madre le ha permitido sobrellevar la condición de no oyente.

Menciona que don Luciano ha vivido momentos muy difíciles y frustrantes ya que es difícil insertarse en una sociedad tan discriminadora, pese a lo cual sigue luchando por su familia y mejorar su calidad de vida en general. Agrega que, es



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB

evidente que serían otras las condiciones si don Luciano no hubiera perdido la audición, hubiera tenido otras oportunidades educativas, habría podido estudiar lo que le apasiona, que es la gastronomía, lo que le habría permitido sostener a sus hijas junto a su pareja. Como nada de aquello pudo acontecer, por cuanto don Luciano se encuentra sin trabajo, debiendo vivir de allegado con su familia en la casa de su madre, debe vivir del apoyo de ésta, quien lo sostiene económicamente prácticamente en todo.

Por último, indica que su representado piensa mucho en todo lo diferente que hubiera sido si su madre no hubiera sido torturada y encarcelada. Tendría el placer de oír, podría escuchar a sus dos hermosas hijas, sus voces, sus risas, sus llantos, y por supuesto escucharlas decir “Papá”, poder haber oído a su hija Luciana en su pasión por la música, deleitarse con su voz, escuchándola cantar, todo lo anterior le fue abruptamente quitado, producto de los brutales golpes que sufrió mientras se encontraba en gestación, sufriendo a diario por este motivo.

Denota que, como consecuencia directa de las torturas producidas a su representada se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de cuarenta años de lo sucedido la persona continúa con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidos.

Aduce que el daño moral se hace patente por sí mismo en atención a los hechos, es decir, salta a la vista de lo evidente que es las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

Señala que en razón de los hechos decretos, demanda al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa del secuestro y torturas de que fueron objeto, el pago de doscientos millones de pesos (\$200.000.000), para doña Isabel Lorena Pallas Norambuena y trescientos millones de pesos (\$ 300.000.000) para don Luciano Muñoz Pallas, atendido el hecho de que, además de sufrir torturas cuando se encontraba en el vientre de su madre, producto de éstas desarrolló una enfermedad que le privó del sentido de la audición y, asimismo, le ha privado de



poder tener un desarrollo profesional, mantener un trabajo estable y de poder sostener a su grupo familiar, sumas que deberán ser pagadas con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que estime el Tribunal, de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

Respecto de los hechos delictuosos narrados, sostiene que el Estado de Chile es civilmente responsable, ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión, eran miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o civiles adscritos a las mismas, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública.

Añade que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech”. En efecto, en el Informe Valech, sus representados fueron reconocidos como víctima de prisión política y tortura.

Menciona que la responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado a su mandante, emana en primer lugar de un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, el que se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial, y que es anterior a la fecha de comisión de los hechos juzgados en la presente causa.

Advierte también que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha producido daño a personas que no se encuentran sujetas a sufrir el gravamen de soportarlos por atentar a la igual repartición de las cargas públicas, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, según la doctrina unánime de los autores iuspublicistas, es imprescriptible.

Alega que la responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV del Código Civil.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB

En suma, expone que las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resulta aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en la especie también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, la acción que se ejerce en estos autos es imprescriptible.

Por otra parte, refiere que las disposiciones constitucionales que consagran la responsabilidad del Estado por los daños cometidos en cualquiera de sus actividades tienen una vinculación directa sin ser necesaria la dictación de una norma de inferior rango que disponga su aplicación, es decir, poseen operatividad propia y, obviamente, desde el momento que asumen su carácter de normas constitucionales priman por sobre toda otra disposición.

Explica que, la responsabilidad extracontractual también emana de la acción de indemnización contemplada en los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que consagran la responsabilidad del Estado por falta de Servicio, normas en la que se hace responsable al Estado por los daños que causen los órganos de la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.

Refieren que en el caso *ad litem* se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados:

1.- En cuanto al daño moral, por el solo hecho de haberse producido un delito éste se presume.

2.- La acción u omisión emanó de un órgano del Estado, agentes del Estado torturaron a sus mandantes sin que haya demostrado la sujeción a procedimiento alguno.

3.- Nexo causal. El daño a las víctimas emana, justamente, de la perpetración del delito civil.

4.- Por último, no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

Denota además que, de acuerdo a los hechos narrados precedentemente, los agentes del Estado incurrieron en una falta personal, al privar de forma ilegítima de la libertad y someter a torturas los demandantes.

Advierte que en esta perspectiva, el Estado no puede desvincularse de la falta en que incurrieron sus agentes, ya que fue el propio Estado el que les asignó la función pública de reunir información estratégica para la seguridad nacional, la



que ejercieron abusivamente cometiendo falta personal en su ejercicio, comprometiendo con ello la responsabilidad del Estado.

Hace presente que el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales -en la especie la de establecer responsabilidades-, incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquéllos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

Arguye que el Derecho Internacional, tanto a partir de normas consuetudinarias como convencionales, ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño. Para que esta responsabilidad pueda hacerse efectiva deben concurrir dos elementos. El primero de ellos es la violación de una obligación internacional, situación que en el caso presente se encuentra plenamente cumplida pues la privación ilegítima de libertad y las torturas graves y reiteradas, cometidos en contra del demandante, mirados desde la perspectiva del derecho internacional, asumen la tipología de delitos contra el derecho internacional. Y en este caso específico, como delitos de Lesa Humanidad. En efecto, en la medida que el ilícito cometido se da en el contexto histórico de atentados masivos, reiterados y sistemáticos en contra de la población, motivados por móviles políticos e ideológicos y ejecutados por agentes estatales, otorgan la configuración de un delito de Lesa Humanidad, con las naturales consecuencias jurídicas que derivan de dicha calificación.

Por otra parte, consigna que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común.

Señala que la indemnización comprende -según el artículo 2329- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB

Sostiene que, fluye de todo lo señalado que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por sus mandantes.

En consecuencia, solicita tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, representado, -en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado- por doña María Eugenia Manaud Tapia, ya individualizados, acogerla a tramitación, y -en definitiva- aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fueron objeto, la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a doña Isabel Lorena Palleras Norambuena y la suma de \$ 300.000.000 (trescientos millones de pesos) a don Luciano Muñoz Palleras, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que este Juzgado estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con costas.

Con fecha 10 de junio de 2020, se notificó la demanda al Fisco de Chile.

Con fecha 26 de junio de 2020, la parte demandada contesta la demanda, solicitando su rechazo o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

#### I.- Excepción de Reparación Integral

Como primera defensa, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la actora.

Afirma que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada.

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB



Indica que, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Sostiene respecto a las reparaciones mediante transferencias de dinero, que términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre del año 2015, la suma total de \$706.387.596.727.-

Asimismo indica, desde esta perspectiva, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que pueda valorizarse para saber cuál fue su impacto compensatorio. De este modo, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como también las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Refiere que, el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.992 y sus respectivas modificaciones. De este modo, se estableció una pensión anual de reparación y otorgó beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas, estableciendo una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, la actora recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación, en conformidad a la Ley N° 20.874 por la suma de \$1.000.000.

Expone que, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.



Hace presente que, además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. Asimismo, se les ofrece apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Afirma que, se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores; y también beneficios en vivienda, correspondiente al acceso de subsidios de vivienda.

Manifiesta que, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Afirma que de ello puede concluirse que, los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos.

Manifiesta que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

## II.- Excepción de prescripción:

Asimismo el demandado opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB

legal, solicitando que por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Manifiesta que, conforme al relato efectuado por la actora, la detención ilegal y tortura que sufrieron ellos fueron cometidos el 15 de junio de 1983.

Sostiene que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 10 de junio de 2020, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

Por lo anterior, el demandado opone la excepción de prescripción de cuatro años establecida en el artículo 2332 del Código Civil y en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, habría transcurrido el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Advierte que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras.

Agrega que entre las normas de interés está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado.

Indica que, debe considerarse que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.



En relación con las alegaciones expuestas por el actor en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, hace presente que:

1.- Respecto a la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

2.- Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto el Máximo Tribunal.

3.- La Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, la cual se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no se podría extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

4.- La Convención Americana de Derechos Humanos, destacando que en relación a esta convención al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, agrega que el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB

Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.

Afirma que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no se puede apartar del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

### III.- En cuanto al daño e indemnización reclamada:

Con relación al daño moral, la parte demandada hace presente que los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Señala que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez solo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Manifiesta que, las cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos



promedios fijados por los tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Continúa su defensa, señalando que en subsidio de las alegaciones opuestas, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado, y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Manifiesta respecto a los reajustes e intereses demandados, que los primeros solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Así, a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existiría ninguna suma que deba reajustarse.

Sostiene que los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada, ya que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se acogiera la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, sostiene que tales reajustes solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Reitera que en el hipotético caso de que se acoja la acción de autos y se condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Concluye solicitando tener por contestada la demanda civil deducida en autos, y, en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes, con costas, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

**Con fecha 11 de julio de 2020, la parte demandante evacua el trámite de la réplica,** ratificando los fundamentos señalados en la demanda.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB

Agrega que, el hecho de que sus representados hayan obtenido pensiones de reparación con arreglo a la Ley N° 19.992 que estableció medidas de reparación para las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, y sus modificaciones, y a la Ley N° 20.874, no es impedimento para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República.

Refiere que la pretensión de oponer excepción de pago, resulta irreconciliable con la normativa internacional señalada, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice el derecho internacional, en materias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.

Menciona que con estas leyes, el Estado asume voluntariamente formas distintas de reparación, lo que no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia por los medios que autoriza la ley. Así lo ha establecido en numerosas ocasiones la jurisprudencia de la Corte Suprema, en sentencias dictadas en causas por graves violaciones a los derechos humanos (Rol N° 30.598-14; N° 40.168-2017; N° 5436-10, sentencia reemplazo; Rol N° 62.211-16; Rol N° 82.246-16).

Por otra parte, indica que la jurisprudencia de la E. Corte Suprema ha sido enfática en señalar, que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, la que es integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, y que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley 19.123 reconoció de manera explícita la existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, por violación a los derechos humanos en el periodo 1973-1990, comprendidas en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario (en este sentido, Sentencias Corte



Suprema Roles N° 20.288-14, de 1e de abril de 2015; N° 1-424-2013 de 1 de abril de 2014; N° 22.652-2014 de 31 de marzo de 2015; entre otras).

En cuanto al monto de la indemnización, considera ajustado a la justicia el monto demandado, ya que se trata del daño moral de la mayor entidad, dadas las consecuencias dañosas de los aciagos hechos narrados para la salud mental de sus mandantes.

Por último, respecto a los reajustes e intereses demandados están conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización.

Con fecha 22 de julio de 2020, la parte demandada evacuó el trámite de la **dúplica**, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en el escrito de contestación.

Con fecha 31 de julio de 2020, se **recibió la causa a prueba**.

Con fecha 24 de agosto de 2022, se **reactivó el término probatorio suspendido**.

Con fecha 27 de octubre de 2022, se **citó a las partes a oír sentencia**.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, don Boris Paredes Bustos, en representación de doña Isabel Lorena Pallas Norambuena, y de don Luciano Muñoz Pallas, interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, todos ya singularizados, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho latamente consignados en lo expositivo de la presente sentencia.

**SEGUNDO:** Que, la demandada contestó el libelo al tenor de lo narrado en lo expositivo de este fallo.

**TERCERO:** Que, se recibió la causa a prueba, y se fijaron los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos respecto de los cuales debía recaer la prueba:

1.- Efectividad que los demandantes han sufrido los perjuicios descritos en el libelo pretensor. En la afirmativa, naturaleza y monto de los perjuicios.

2.- En su caso, efectividad de que dichos perjuicios son imputables al actuar de la demandada.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB



3.- Relación de causalidad entre el actuar de la demandada y los perjuicios demandados.

4.- Efectividad de que los demandantes fueron reparados por el daño extrapatrimonial alegado. En la afirmativa, tipo de reparación obtenida y efectividad de ser satisfactiva.

**CUARTO:** Que, a objeto de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó a los autos los siguientes documentos:

1. Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad, acompañado en autos rol C-22561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago.
2. Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
3. Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Psicólogo Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Auxiliar de Enfermería Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.
4. Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de junio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
5. Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.
6. Informe de daño biopsicosocial de doña Isabel Lorena Pallas Norambuena y de don Luciano Muñoz Pallas, emitido por el PRAIS de Valparaíso, de fecha 1 de Agosto de 2022.
7. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech.
8. Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech.
9. Carpeta de atención y ficha de ingreso de preso político y/o torturado, de doña Isabel Pallas Norambuena y don Luciano Muñoz Pallas, substanciada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.



10. Certificado de nacimiento de don Luciano Muñoz Palleras.
11. Certificado don Luciano Muñoz Palleras, emitido por el COMPIN de Valparaíso, de fecha 14 de Abril de 2004.
12. Credencial de don Luciano Muñoz Palleras emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 26 de Agosto de 2011.
13. Certificado médico de don Luciano Muñoz Palleras emitido por el Dr. Denis Barría González con fecha 25 de Agosto de 2022.

**QUINTO:** Que, a su turno, la demandada solicitó oficiar al Instituto de Previsión Social (IPS), a fin de que diera cuenta de todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que han obtenido doña Isabel Palleras Norambuena y don Luciano Muñoz Palleras, y cuya respuesta fue evacuada a folio 26 de autos.

**SEXTO:** Que, son hechos indiscutidos en la presente causa, por no haber mediado controversia entre las partes, los siguientes:

1. Que con fecha 15 de junio de 1983, doña Isabel Palleras Norambuena fue detenida, en contexto de protesta estudiantil, en las dependencias de la Universidad de Playa Ancha.
2. Que durante su cautiverio fue víctima de apremios físicos y psicológicos.
3. Que al momento de su detención, doña Isabel Palleras Norambuena se encontraba embarazada de 4 meses.
4. Que producto de las torturas que experimentó, su hijo, Luciano Muñoz Palleras, desarrolló desde su cuatro mes de vida una hipoacusia bilateral profunda, que lo mantiene discapacitado de por vida.
5. Que doña Isabel Palleras Norambuena y don Luciano Muñoz Palleras han sido reconocidos como víctima de violación a los Derechos Humanos por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el número de registro 6450 y 5818, respectivamente.

**SÉPTIMO:** Que, la presente acción corresponde a una demanda de indemnización de perjuicios, deducida por doña Isabel Palleras Norambuena y don Luciano Muñoz Palleras, por el daño moral sufrido en su calidad de víctimas – directa o indirectamente- de prisión política y tortura durante el régimen militar.

Luego, sin perjuicio de analizar si concurren los requisitos para acoger la pretensión de los actores, concierne referirse previamente a las defensas esgrimidas



por el demandado, las que se circunscriben a la reparación integral por haber sido ya indemnizada y a la prescripción.

**OCTAVO:** Que, en efecto, alega la demandada que los actores ya se encontrarían indemnizados de los perjuicios padecidos, por haber recibido su reparación integral mediante transferencias de dinero, beneficios de salud (PRAIS) y gestos simbólicos, de manera que al haberse compensado los daños morales sufridos, no pueden ser exigidos nuevamente.

**NOVENO:** Que, conforme a lo informado por el Instituto de Previsión Social, consta que tanto doña Isabel Palleras Norambuena como don Luciano Muñoz Palleras han recibido cada uno como reparación la cantidad total de \$20.286.616.-, suma de la cual \$18.930.570 corresponden a pensión por beneficio Ley N° 19.992, \$1.000.000 por concepto de Aporte Único Ley N° 20.874, \$359.046 por concepto de aguinaldos, siendo su pensión mensual actual de \$194.726.

**DÉCIMO:** Que, las transferencias de dinero realizadas a los demandantes, los beneficios de salud y las reparaciones simbólicas a que alude la demandada, no implican –necesariamente– la reparación íntegra de los daños padecidos por la demandante en su calidad de víctima de prisión política y tortura, y que el Estado de Chile se encuentra obligado a proporcionar.

En efecto, el propio artículo 24 de la Ley N° 19.123 prescribe en su inciso primero que: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*, reconociendo que éste puede obtener otras reparaciones, como sería aquella decretada, de ser procedente, por los tribunales de justicia vía acción indemnizatoria.

Lo anterior, se fundamenta considerando que las reparaciones otorgadas por la legislación, han sido concedidas y determinadas por el propio Estado, en términos generales y únicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, de manera que su efecto reparador no necesariamente es pleno.

Además, los beneficios otorgados por la Ley N° 19.123, dicen relación más bien con prestaciones de carácter asistencial y patrimonial, lo que marca una diferencia ostensible con la reparación del daño moral. Así, las pensiones mensuales de reparación, la bonificación compensatoria, los beneficios médicos y educacionales, guardan una mayor armonía con los conceptos de daño emergente y lucro cesante, de manera que de estimarse y probarse que el daño moral inferido excede las



mencionadas pensiones o es independiente a ellas, no existe razón suficiente como para, de antemano, rechazar la demanda.

En el mismo sentido se viene pronunciando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia: *“La normativa invocada por el Fisco – que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido producto de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley”* (Sentencia Excma. Corte Suprema en causa Rol N<sup>o</sup> 12.636-2018).

Conforme a lo que se ha venido exponiendo, cabe desestimar la excepción de reparación integral opuesta por el demandado, sin perjuicio de tener presente el hecho al momento de fijar el monto de la eventual indemnización.

**UNDÉCIMO:** Que, respecto a la excepción de prescripción extintiva, el Fisco de Chile indica que entre la fecha en que se hizo exigible la indemnización y la fecha de notificación de la acción, ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, por tratarse de una materia de responsabilidad extracontractual; y en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 relación al artículo 2514, ambos del Código Civil.

**DUODÉCIMO:** Que, la excepción de prescripción opuesta lleva a cuestionarse si la acción civil que deriva de un delito de lesa humanidad, se aviene a las normas internas que rigen en el ámbito patrimonial donde está consagrada esta institución, o bien, por el contrario, y por la trascendencia de la materia en discusión, escapa de la reglamentación interna, sometándose a una normativa supralegal e internacional, relativa a los Derechos Humanos.

Tal cuestionamiento –y la postura que se adopte- no resulta trivial. En efecto, de estimarse que la prescripción opera íntegramente en estos casos, la acción civil derivada de dichos ilícitos podría prescribir al transcurrir cinco años de cometidos los hechos, o desde la fecha en que existiera certeza que la actora pudo



ejercer la acción. A la inversa, de considerarse que la reglamentación patrimonial es inaplicable, la acción civil sería imprescriptible.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, para zanjar tal problemática, es preciso considerar que, si bien no existe norma -ni nacional ni internacional- que se pronuncie derechamente sobre el particular, este silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad).

Esta postura, determinante en el ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las conductas que se persigue sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los agentes del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de las personas.

Ahora, si bien no existe dicho dictamen en el área civil, el mismo fundamento puede extrapolarse a este ámbito. Más aún, los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos integrados a nuestra normativa conforme al inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental- y la propia legislación interna dictada a consecuencia de dichos crímenes, propenden a una reparación integral tanto de sus víctimas como de sus familiares, lo que necesariamente incluye el resarcimiento monetario, el que por derivar de un delito de lesa humanidad, trasciende su naturaleza meramente patrimonial, marcando un contraste con el ilícito civil común.

Así las cosas, la reparación íntegra que se persigue para aquellos que han sido víctimas de los actos ejecutados por el Estado de Chile en tiempos del régimen militar, debe incluir tanto una persecución penal y un resarcimiento civil que no esté condicionado por el transcurso del tiempo. Solo así, una vez indemnizadas todas aquellas personas que fueron afectadas en dicho período por actos de agentes del Estado, se cumplirá con aquella reparación completa a que Chile se ha comprometido tanto internacionalmente como ante el propio país.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Excma Corte Suprema, al consignar: *“en el caso de delitos de lesa humanidad, como el que sustenta la demanda de los actores, siendo la acción penal persecutoria imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil*



*interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación integral de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno,...*” (Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N° 12.636-2018).

Con todo lo dicho, dada la naturaleza y contexto de los ilícitos fundantes, esta sentenciadora se inclina por la postura de una imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil, lo que conducirá al rechazo de la excepción de prescripción opuesta.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, ahora, entrando en el fondo de la discusión de estos autos, cabe reiterar que los actores demandan indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, con ocasión de la detención por motivos políticos y torturas de que fue objeto doña Isabel Palleras Norambuena por parte de agentes del Estado el 15 de junio de 1983, hecho indiscutido y no desconocido por la demandada, e incluso calificados como víctimas del listado de prisioneros políticos y torturados.

Por consiguiente, siendo inconcuso el hecho dañoso del que deriva la responsabilidad del Estado hecha valer, cabe centrarse en la demostración del detrimento moral alegado por los demandantes.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, el daño moral es, en términos generales, el menoscabo o agravio a un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a dolo o culpa de otro, que estaba obligado a respetarlo, en la especie, el Estado de Chile.

El daño moral tiene su causa en la transgresión al ordenamiento jurídico y su consecuencia es el sufrimiento causado en la víctima, producto de la limitación a un interés legítimo. Así, la persona titular de un derecho subjetivo o de un bien jurídico, al ser despojada de su legítimo goce, se le priva de su ejercicio y sufre como consecuencia un daño extrapatrimonial.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB

**DÉCIMO OCTAVO:** Que si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por el actor -sino más bien la suma pedida a su respecto-, en aras de demostrar la conculcación de derechos humanos, la parte demandante rindió prueba documental, destacándose aquí el Informe biopsicosocial extendido por PRAIS Valparaíso, evacuado con fecha 1 de agosto de 2022.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, los diagnósticos y conclusiones arribadas por los profesionales de la salud que le atendieron, permiten desvelar que la vida de la actora experimentó un vuelco, toda vez que, a más del quiebre de su familia nuclear que significó la detención de sus hermanos y ejecución de uno de ellos, en razón de su militancia política, hubo de soportar una experiencia personal tortuosa mientras estuvo detenida en el mes de junio de 1983.

Se colige que la demandante evidencia secuelas de daño biopsicosocial, concordantes con los hechos vividos, y las consecuencias de largo plazo producto de las torturas físicas, sexuales y psicológicas, y encarcelamiento sufridas en estado de embarazo, que resultan consistentes con los antecedentes históricos de las instituciones involucradas tanto en lo referido al lugar, las fechas, los métodos de tortura aplicados. Asimismo, el proyecto laboral se vio interrumpido abruptamente, dejando graves secuelas en su desarrollo social, profesional, y por tanto, en su situación económica actual.

También constituye un hito que le impactó gravemente, fueron las torturas a Lorena en estado de embarazo, que gatillaron las secuelas de salud que afectaron el proyecto de vida de su hijo Luciano, desde que la discapacidad auditiva -hipoacusia bilateral severa- que le fue diagnosticada a los pocos meses de vida, ha mancillado la dinámica familiar y la diada madre-hijo, con sentimientos ligados a culpa y rabia.

Se añade que todo lo ocurrido con Luciano ha puesto en tensión a la familia, producto de las grandes dificultades que el ambiente instaura a las personas con discapacidades, aumentando y cronificando la sensación de marginalidad, soledad y de empatía del entorno social, que ya arrastraba la familia con anterioridad.

Lo anterior se ve refrendado con el Certificado de Discapacidad emitido por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio de 14 de abril de 2004, que da cuenta que Luciano Muñoz Palleras, se encuentra absolutamente incapacitado para ganarse



el sustento, con un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, que padece desde su niñez.

**VIGÉSIMO:** Que, correspondiendo avaluar prudencialmente el daño moral padecido por los actores, este será estimado en la suma de \$35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos) para doña Isabel Pallas Norambuena y un monto de \$30.000.000 (treinta millones de pesos) para don Luciano Muñoz Pallas. Para ello, se tiene en cuenta la edad de doña Isabel Pallas Norambuena al momento de ocurridos los hechos, los efectos que produjeron estos en el desarrollo vital de cada uno de los actores, como el temor de ser nuevamente capturada, unido al dolor experimentado como consecuencia de la ejecución de don Adolfo Pallas Norambuena.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, la suma mencionada será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de dictación del fallo, mientras que los intereses corrientes se devengarán desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estimando que la demandada ha tenido motivo plausible para litigar, se le eximirá del pago de las costas.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 47, 222, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción.

II.- Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, las siguientes sumas de dinero:

- A doña Isabel Lorena Pallas Norambuena, el monto de \$35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos);
- A don Luciano Muñoz Pallas, la cantidad de \$30.000.000 (treinta millones de pesos).

III.- Que la cantidad mencionada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de





dictación del fallo, y devengará intereses corrientes desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

IV.- Que no se condenará en costas a la demandada por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol C-7383-2020

Pronunciada por don Pablo Emanuel Pizarro Arredondo, Juez Suplente del Trigésimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, tres de Marzo de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZHXXELKFXB